

¹ Foja 1 y 2.

(...)"

2. **Admisión y trámite.** Por auto de [doce de septiembre de dos mil veintitrés²](#), dictado por el Magistrado Presidente de la extinta Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, se registró la demanda con el número [2566/2023](#), se admitió a trámite, ordenándose el emplazamiento a las autoridades demandadas y, se proveyó respecto a los medios probatorios ofrecidos.

3. **Creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes.** Mediante Decreto 405 de la LXV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el ocho de agosto del dos mil veintitrés en el que se derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y el Decreto número 552 de la LXV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el uno de diciembre del dos mil veintitrés en el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes se crea este órgano jurisdiccional en sustitución de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.

4. **Se instala el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes y se decreta suspensión.** Mediante acuerdo AC-TJA/PL/01/EXT/2024.02 se declaró la instalación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes, por parte del Pleno el cual quedó conformado por los Magistrados Jaime Gerardo Beltrán Martínez (Presidente), David Ángeles Castañeda, María Guadalupe Gallegos León, Norma Angélica Morquecho Damasco y Marcos Javier Tachiquín Rubalcava, además del inicio de sus funciones materiales y jurisdiccionales en la

² Foja 11.



misma fecha de su celebración y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, esto es, el ocho de enero de dos mil veinticuatro; y, en diverso acuerdo AC-TJA/PL/01/EXT/2024.07 de esa misma fecha se declaró la suspensión de las labores jurisdiccionales, con suspensión de términos y plazos procesales con el propósito de dar cumplimiento a la transferencia de los procedimientos, expedientes y documentación que en el ámbito de su competencia, tuviera bajo su atención o resguardo la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, por el término de diez días hábiles a partir de la instalación.

5. **Se levanta suspensión y se turna asunto.** El veintidós de enero de dos mil veinticuatro³, se levantó la suspensión decretada y la Secretaría General turnó el expediente a la Magistrada Norma Angélica Morquecho Damasco adscrita a la Sala IV del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado quien formula la presente sentencia conforme al artículo 60 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo.

6. **Autoridad demandada contesta.** Mediante proveído de [doce de febrero de dos mil veinticuatro](#)⁴, se tuvo por contestada la demanda a Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes y se acordó respecto a los medios probatorios ofrecidos. De igual forma, en dicho auto se declaró por perdido el derecho a formular contestación a la demanda por parte del Instituto Registral y Catastral del Estado de Aguascalientes.

7. **Parte actora amplía demanda.** En acuerdo de [veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro](#)⁵, se tuvo a la parte actora por formulada ampliación de demanda.

8. **Autoridad demandada contesta ampliación de demanda.** En proveído de [veinticuatro de mayo de dos mil](#)

³ Foja 37.

⁴ Foja 38.

⁵ Foja 48.

veinticuatro⁶, se tuvo a la autoridad demandada Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes por contestando la ampliación a la demanda, se proveyó respecto a los medios probatorios aportados y se señaló fecha para audiencia de juicio.

9. Audiencia de juicio. El diez de septiembre dos mil veinticuatro⁷ se celebró audiencia de juicio en la que se desahogaron las pruebas, se abrió el periodo de alegatos y se citó el asunto para dictar sentencia definitiva.

CONSIDERANDOS:

I. Competencia

10. Esta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes, es competente para conocer del juicio contencioso administrativo, de conformidad con los artículos 17, y 116 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 A y 50 C de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; segundo párrafo del artículo Segundo Transitorio del Decreto número 405 de la LXV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes; los artículos 2, 5, 8, 9, 24, 25 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes, así como los artículos 2, 3, 28, 29, 30 y 32 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes; pues la parte actora impugna una resolución emitida por autoridad fiscal del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, la cual afirma le causa agravio.

II. Existencia del acto impugnado

11. La existencia de la resolución impugnada, precisada en

⁶ Foja 55.

⁷ Foja 56 y 57.

el resultando I, se acredita con la resolución determinante del impuesto a la propiedad raíz emitida por el Secretario de Finanzas Públicas del municipio de Aguascalientes, el *veintidós de agosto de dos mil veintitrés*, correspondiente a los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 en relación al bien inmueble de su propiedad, con número de cuenta predial *****, misma que obra en autos a fojas 21 a 36 del expediente.

12. Que al ser exhibida por la demandada Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, al producir contestación a la demanda, la cual es DOCUMENTAL PÚBLICA que al haber sido expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, merece pleno valor probatorio de conformidad al artículo 341 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, de aplicación supletoria a la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes por disposición de sus numerales 3º y 47.

III. No se actualiza causal de improcedencia.

13. En virtud de que no se actualiza causal de improcedencia alguna, lo que procede es estudiar los conceptos de nulidad que hace valer el accionante, los que por economía procesal no se transcriben, aunado a que no es un requisito formal de las sentencias⁸.

14. Del mismo modo, se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones innecesarias, las defensas opuestas por la demandada, sin que puedan ser tomados en cuenta los motivos y fundamentos legales para la emisión del acto impugnado que no hayan sido invocados en éste, de conformidad con lo

⁸ Al respecto, véase la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la novena época, localizable con número de registro: 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al rubro señala: **CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.**

dispuesto en el primer párrafo, del artículo 37 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado.

IV. Análisis de los conceptos de nulidad relativos a los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018.

15. De los argumentos expuestos por la parte actora, se estudia el concepto de nulidad **SEGUNDO** del escrito inicial de demanda, ya que de ser fundado es el que mayor protección le brindaría.⁹

16. Expresa la parte actora como concepto de nulidad **SEGUNDO** del escrito inicial de demanda, que con relación a los ejercicios fiscales **2016, 2017 y 2018**, la facultad para determinar el cobro se encuentra prescrita al exceder, por lo que la autoridad no tiene la facultad para determinarlos.

17. Es **FUNDADO** el razonamiento expuesto por la parte actora; ya que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 42 fracción III del Código Fiscal del estado establece que:

Artículo 42.- La obligación tributaria se extingue por:

(...)

III.- Prescripción.

18. En relación con lo dispuesto anteriormente, el artículo 51 del mismo ordenamiento, establece que:

“Artículo 51.- Los créditos fiscales prescriben en el término de cinco años. En el mismo plazo se extingue por prescripción el derecho de los particulares a solicitar la devolución de las cantidades pagadas indebidamente, que señala el artículo 100 de este Código. Este término se contará a partir del día en que el contribuyente efectuó el pago.

La prescripción de los créditos fiscales produce la prescripción simultánea de los recargos y los gastos de ejecución.

La prescripción se inicia a partir de la fecha en que el crédito fue exigible.”

⁹ Al respecto, véase la tesis de jurisprudencia XVI.1o.A.T. J/9, de la novena época, localizable con número de registro electrónico: 166717, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, cuyo rubro señala: **“CONCEPTOS DE ANULACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE AQUELLOS QUE CONDUZCAN A DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO IMPUGNADO POR REPRESENTAR UN MAYOR BENEFICIO PARA EL ACTOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).”**

19. Asiste la razón al actor, respecto de que la facultad de la autoridad demanda para determinar y hacer exigible el crédito fiscal, por lo que corresponde a los años **2016, 2017 y 2018**, ha prescrito al haber transcurrido el término de cinco años para hacerlos exigibles.

20. Ello es, porque se señala en el artículo 49 de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes que:

“Artículo 49.- Este impuesto se pagará en forma anual dentro del periodo comprendido del mes de enero al último día hábil del mes de marzo.”

21. Así, el término para que opere la prescripción que aduce la parte actora, comenzó a correr a partir de la fecha en que el Impuesto a la Propiedad Raíz (Predial), para los ejercicios fiscales correspondientes a los años en mención, fueron exigibles.

22. Por lo que considerando que el impuesto a la propiedad raíz debe pagarse en el término indicado, al no verificarse el pago en el plazo establecido por el artículo citado, se vuelve legalmente exigible su cobro por parte de la autoridad exactora, de modo tal, que fue a partir del primer día hábil del mes de abril de los años **2016, 2017 y 2018**, respectivamente, que al no haberse efectuado el pago, la autoridad pudo haberlo requerido, siendo desde esas mismas fechas a partir de las cuales comenzó a correr el término de cinco años relativo a la prescripción de los correspondientes créditos fiscales.

23. Dichos términos fenecieron el **último día hábil del mes de marzo** de los años **2021, 2022 y 2023**, respectivamente, sin que de las constancias que obran en autos se advierta que se hubiere interrumpido en ningún caso en términos del artículo 53 del Código Fiscal del Estado de Aguascalientes¹⁰, el plazo de cinco

¹⁰ **ARTÍCULO 53.-** El término de la prescripción **se interrumpirá:**

I.- Por cualquier acto de la autoridad que tienda a la determinación y cobro del crédito fiscal, **siempre que se notifique al deudor.**

II.- Por cualquier acto o gestión del deudor en que expresa o tácitamente reconozca la existencia de la prestación fiscal de que se trate.

años que se requiere para que opere la prescripción de dichos créditos fiscales que se le requieren a la parte actora, por lo que hace a los ejercicios fiscales en comento.

24. Luego, si de los autos, se advierte que el actor conoció el crédito fiscal en su contra el día *veintidós de febrero de dos de dos mil veinticuatro*, fecha en la cual le fue notificado personalmente la contestación de demanda de la autoridad municipal demandada a la cual acompañó la determinación de impuesto predial impugnada, (*visible a fojas 21 a 36 del expediente*), es factible deducir, que **el cobro correspondiente a los ejercicios fiscales mencionados han prescrito**, por haber transcurrido **más de cinco años** para su cobro, contados a partir de la fecha en que cada crédito fiscal fue exigible; sin que dicho plazo se haya interrumpido en términos del citado artículo 53 del Código Fiscal del Estado.

25. Al efecto es aplicable el siguiente criterio de jurisprudencia, que este Tribunal comparte, de la novena época, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXXIV; septiembre de 2011; Tesis 2a./J. 150/2011; Pág. 1412; Materia Administrativa, que al rubro y texto señala:

PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. EL REQUERIMIENTO DE PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A QUE SE CONSUMÓ EL PLAZO PARA QUE SE ACTUALICE AQUÉLLA NO LO INTERRUMPE. De la interpretación del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación se colige que ***basta con que haya transcurrido el plazo de 5 años para que se actualice la prescripción de los créditos fiscales, gun cuando el deudor no hubiera impugnado un acto de ejecución realizado por la autoridad con posterioridad a que se consumó dicho plazo, es decir, el acto de cobro posterior no puede interrumpir un lapso extinguido, ni implica respecto al nuevo acto una renuncia tácita al plazo de prescripción consumado. Lo anterior es así, porque la prescripción constituye una sanción contra la autoridad hacendaria por su inactividad derivada de no***

III.- Por cualquier gestión de cobro formulada por escrito que los interesados hagan ante las autoridades fiscales. De estos actos, gestiones o notificaciones, deberá existir una constancia escrita. En estos casos, el nuevo plazo comenzará a contarse a partir de la fecha en que cese la interrupción.

ejercer su facultad económico coactiva, de modo que una vez fenecido el plazo para que opere, el contribuyente puede hacerla valer, vía acción ante las propias autoridades fiscales cuando no se ha cobrado el crédito, o vía excepción cuando se pretenda cobrar, a través de los medios de defensa correspondientes, aun cuando la autoridad con posterioridad a la consumación de dicho plazo haya realizado un acto de cobro y éste no lo haya impugnado el deudor, ya que la prescripción no está condicionada a que el contribuyente impugne las gestiones de cobro realizadas con posterioridad a la consumación del plazo referido; sostener lo contrario, provocaría que fuera letra muerta el citado artículo 146, pues la autoridad indefinidamente llevaría a cabo actos de cobro, sin importar que hubiera operado la prescripción, lo cual es inadmisibles, dado que atentaría contra los principios de seguridad y certeza jurídica que inspiraron al legislador al establecer la institución de la prescripción.

26. En tal tesitura, se dice que la obligación tributaria que tenía la parte actora respecto a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, se han extinguido, toda vez que han prescrito.

V. Análisis de los conceptos de nulidad relativos a los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

27. Enseguida, antes de entrar al estudio de los conceptos de nulidad, se hace necesario asentar algunas precisiones respecto a que la parte actora en su escrito inicial de demanda y de ampliación, aseguró que desconoce el acto administrativo que combate, por lo que se requirió a las autoridades demandadas mediante auto de fecha *doce de septiembre de dos mil veintitrés* a fin de que exhibieran la determinación combatida y sus respectivos avalúos que sirvieran de base, al ser desconocidas por la parte accionante, sin que así se hubiere cumplido a cabalidad como se verá a continuación.

28. Al contestar la demanda, la Secretaría de Finanzas Públicas del municipio de Aguascalientes, exhibió la resolución

impugnada, misma que ha sido descrita en el Considerando Segundo de esta sentencia; en tanto que la autoridad catastral en el Estado, omitió exhibir los avalúos catastrales correspondientes a los ejercicios fiscales y cuenta impugnada, siendo que el desconocimiento que adujo tener la parte actora, **obligaba** a las autoridades demandadas a exhibir la resolución determinante del crédito fiscal impugnado, **con los avalúos que supuestamente sirvieran de base para ello**, sin que así haya sucedido, dándole oportunidad a la parte accionante de impugnar en ampliación de demanda dichos documentos.

29. Por lo que al ser omisas en exhibir la resolución determinante del impuesto predial que se impugna **con los avalúos que supuestamente sirvieran de base para ello**, se violó lo establecido en el artículo 31, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone:

ARTICULO 31.- Cuando se impugne una negativa ficta, el actor tendrá derecho de ampliar la demanda, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acuerdo recaído a la contestación de la misma.

También podrá ampliar la demanda, cuando en la contestación se sostenga que el juicio es improcedente, por consentimiento tácito, si el actor considera que la notificación del acto impugnado se practicó de manera ilegal y cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que, sin violar el primer párrafo del Artículo 37, no sean conocidas por el actor al presentar la demanda.

Cuando se alegue que el acto administrativo no fue notificado o que lo fue de manera ilegal se estará a lo siguiente:

(...)

II.- Si el actor manifiesta que no conoce el acto administrativo, así lo expresará en la demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, la notificación de éste o su ejecución. En este caso al contestar la demanda la autoridad acompañará constancia del acto administrativo y de su notificación, mismos que el actor podrá combatir en ampliación de demanda dentro de los quince días siguientes a aquél en que los conozca; y

(...).

[Los resaltes son propios de la sentencia.]

30. De lo anterior se advierte, que *las autoridades demandadas dejaron en estado de indefensión a la parte*

actora, toda vez que al no exhibir la resolución determinante de la contribución combatida, **con los avalúos que supuestamente sirvieron de base para ello**, impidió a la parte demandante la posibilidad de combatir tal resolución en ampliación de demanda.

31. Es decir, la parte demandada hizo nugatorio el derecho de la parte actora de controvertir el acto que dijo desconocer, por lo que, si bien, los actos administrativos tienen una presunción de legalidad de conformidad con el artículo 6º de la Ley del Procedimiento Administrativo; lo cierto es que la omisión de haber exhibido las correspondientes resoluciones determinantes del impuesto predial con los valores catastrales por parte de las autoridades demandadas, destruye dicha presunción de legalidad y en consecuencia debe darse por sentado que **en el fondo**, las autoridades demandadas carecen de elementos para determinar el crédito fiscal a la contribuyente, lo que se traduce en una *contravención a las disposiciones aplicables u omisión en la aplicación de las debidas*, que actualiza la causa de anulación prevista en la fracción III del artículo 61 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, lo cual constituye una **violación de fondo** que provoca conforme al diverso numeral 62, fracción II de ese mismo cuerpo de leyes **la NULIDAD LISA Y LLANA** de la determinación del impuesto a la propiedad raíz de los ejercicios fiscales **2019, 2020, 2021, 2022 y 2023**.

VI. Decisión

32. Según lo expuesto en los Considerando V y VI que anteceden, se actualiza la causal de anulación establecida por el artículo 61, fracción III, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes, por lo que, con fundamento en el artículo 62, fracción II, de la citada ley, lo

procedente es DECLARAR la NULIDAD LISA Y LLANA de la resolución definitiva que contiene la determinación de impuesto a la propiedad raíz (predial) de los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 en relación al bien inmueble de su propiedad, con número de cuenta predial *****, con fecha *veintidós de agosto de dos mil veintitrés*.

33. En consecuencia, y con fundamento en el artículo 63, primer párrafo, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes¹¹, deberá restituirse a la parte actora en los derechos que le hubieren sido afectados con motivo de la determinación impugnada cuya nulidad ha sido declarada; por lo **que al tratarse de una nulidad de fondo, la autoridad demandada Secretaría de Finanzas Públicas del municipio de Aguascalientes, deberá acreditar en ejecución de sentencia, la cancelación en su sistema de los créditos fiscales cuya nulidad ha sido declarada.**

VII. Publicación de la versión pública de la sentencia

34. Con fundamento en los artículos 6o. y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como lo dispuesto por los artículos 73, fracción de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena la elaboración y publicación de la versión pública de la presente sentencia.

35. Por las razones que se informan en el presente fallo y con fundamento en los artículos 59, 60, 61, fracción III y 62, fracción II de la Ley del Procedimiento Contencioso

¹¹ **ARTÍCULO 63.-** En el caso de ser fundada la demanda y que la sentencia declare la nulidad de la resolución o acto, las autoridades demandadas quedarán obligadas a otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos que le hubieran sido desconocidos o afectados de manera indebida (...).



Administrativo para el Estado de Aguascalientes, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO. Es procedente la acción ejercida en el presente juicio.

SEGUNDO. Se declara la NULIDAD LISA Y LLANA de la determinación del impuesto a la Propiedad Raíz para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 en relación al bien inmueble de su propiedad, con número de cuenta predial *****, emitida por el Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes el *veintidós de agosto de dos mil veintitrés*.

TERCERO. Hágase la cancelación a que se refiere el Considerando VI de la presente sentencia.

Notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a las autoridades demandadas; anótese en los sistemas informáticos correspondientes.

Así lo resolvió y firma la Licenciada Norma Angélica Morquecho Damasco, Magistrada de la Sala IV del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Aguascalientes, asistida del Secretario de Acuerdos Jair Sinaí Flores Esparza, quien autoriza y da fe. Doy fe.

Magistrada

Secretario de Acuerdos

La sentencia que antecede se publicó en la lista de acuerdos el diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro. Conste.